



No se trasladó a los ancianos a los hospitales, se tardó en traspasar las competencias a Sanidad y en permitir que la UME las desinfectara... Una historia de imprevisión, abandono y 8.587 de fallecidos

El borrón de ERC con las residencias



ANA MARÍA ORTIZ

Maribel Lozano es enfermera y trabaja en un hospital oncológico. El 11 de abril de 2020 pidió en su centro sanitario un traje EPI con la intención de llevarse a casa y acudir con él a la residencia de mayores donde se encontraba su madre, Matacàs, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Tras semanas sin poder visitarla y con información muy vaga sobre su estado, le habían comunicado que su madre era positivo en coronavirus e intuía el final. El mismo 11 de abril, antes de que pudiera despedirse, la anciana, María Moreno, de 91 años, falleció. «Murió sola y sin asistencia y eso es algo que llevaré toda la vida conmigo y con lo que tendré que aprender a vivir. Pensar en cómo murió me paraliza todavía», dice.

Cataluña se encuentra en el pódium de la lista de comunidades autónomas con más muertos por Covid-19 en residencias: 8.587 a fecha de 9 de febrero, lo que supone el 43% del total de fallecidos en la región.

En el centro de la madre de Maribel, explica ésta, han muerto un centenar de sus 170 residentes. Muchos de ellos en el primer mes que siguió a la declaración del estado de alarma, cuatro semanas mortíferas en las que se concentran la mayor parte de las críticas a la gestión que la Generalitat hizo de la crisis sanitaria en las residencias.

«En la primera parte de la pandemia, en el mes de marzo, la gestión hay que calificarla de nefasta, absolutamente nefasta, y es lo que provocó un cambio de competencias que el sentido común marcaba. A partir de ahí, mejoró», dice Raúl Moreno, diputado del PSC en el Parlament, en referencia al golpe de timón que la Generalitat dio el 10 de abril, cuando trasladó la competencia sobre las residencias de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, que dirige Chakir El Homrani, a la de Salud, en manos de Alba Vergés, am-

bos de ERC. La gestión de los republicanos de los centros de mayores durante el pico de la pandemia, muy cuestionada por el entonces presidente Quim Torra (JxCat), supuso un importante punto de fricción entre los socios de Gobierno.

«La Generalitat comienza a actuar en las residencias tarde, básicamente 15 días tarde. Las personas mayores no eran trasladadas a los hospitales, fallecían en las residencias. Quince días después del inicio de la pandemia no tenían información de lo que pasaba en 250 residencias que no les pasaban datos. Eso es una situación de pandemia y de no pandemia es intolerable. Hubieron centros residenciales que no recibieron los equipos de desinfección que estaban solicitando. A pesar de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) esta-

la UME entró en la residencia Matacàs, el 9 de abril, a petición del Ayuntamiento, y una vez superadas las reticencias de la Generalitat a su intervención, ya habían fallecido 36 residentes. La madre de Maribel ya estaba infectada.

Raúl Moreno es el responsable de políticas sociales del PSC y fue el portavoz de este partido en la comisión que se creó en el Parlament para investigar lo sucedido en los centros de mayores de Cataluña durante la primera fase de la pandemia. La comisión se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2020. «Fue un desastre. La propuso la CUP, la apoyamos todos los grupos y a última hora se sumaron Esquerra y Junts, que no la querían», explica Moreno. «La comisión ha acabado sin conclusiones porque ningún técnico ha dado la cara. Ha sido una cortina de humo provocada por los partidos independentistas para que pasara sin pena ni gloria, como al final han conseguido», añade. Si acudieron a la comisión, explica Moreno, los consellers de Asuntos Sociales y de Salud, pero el último día y tras la insistencia de PSC, PP Cs y Comunes.

«De lo poco que pudimos escuchar es que, efectivamente, en Cataluña no se desplazó a las personas de residencias a los hospitales. Lo contó la Coordinadora de Residencias 5+1 [asociación de familiares], los sindicatos, la asociación de personas de atención a la dependencia, Upimir [Unión de Pequeñas y Medianas Residencias], lo dijo ACRA [la patronal del sector]...», dice Moreno.

La no derivación de enfermos a hospitales durante los días más críticos ha sido una de las principales acusaciones que han hecho a la administración los familiares y las propias residencias. El Gobierno de Cataluña, junto con el de la Comunidad de Madrid, el de Castilla y León o el central de Pedro Sánchez, fueron demandados por el Defensor del Paciente

ante el Supremo por ello. «Son las tres comunidades autónomas en las que teníamos constancia escrita de la medida de no derivar a los ancianos que tuvieran patologías invali-



Maribel Lozano, frente a la tumba de su madre, fallecida por Covid. MARGA CRUZ

dantes a los hospitales», dice Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente. «En Cataluña no desconocían lo que estaba pasando. Había incluso residencias donde el número de muertos era espectacular y seguían con el empeñamiento de no enviarlos a los hospitales», añade.

El protocolo en cuestión aparece también citado en el demoleador informe presentado por Amnistía Internacional en septiembre, en el que se analiza lo sucedido en las residencias de Madrid y Cataluña. Se titula «Abandonados a su suerte». «En Cataluña, el protocolo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), dependiente del Departamento de Salud, recomienda no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus y hace referencia al criterio de futilidad», se lee en el informe.

Maribel no sabe si su madre está entre los enfermos que debieron ser derivados a los hospitales porque nunca conoció bien su estado. «Lo que creo es que no tuvo asistencia ninguna», dice. «Por lo que he hablado con otros familiares, no se envió a nadie al hospital. De hecho,

una de las monitoras lo confirmó: que no los habían derivado porque no los podían derivar, los tenían que manejar en la residencia», cuenta.

Maribel se planteó denunciar, pero al final ha desistido. «Mi madre murió en condiciones lamentables y es una pena que esto quede así, pero sé que no voy a llegar a ningún sitio, que nadie nos va a dar la razón. Se van a amparar en que nos ha cogido en una pandemia», dice, sabedora de que prácticamente todas las denuncias contra las residencias y la administración han sido archivadas.

Ése fue el destino de la presentada por la Coordinadora de Residencias 5+1 contra la Generalitat. «El juez no ha considerado que se hayan aportado suficientes pruebas y las familias estamos muy preocupadas porque sí que se han presentado. Entendemos que es una pandemia que nos ha cogido a todos con el pie cambiado, pero hubiéramos deseado una investigación más profunda», dice Mónica Blasco, secretaria de la Coordinadora.

Esta asociación fue especialmente dura con la Generalitat «-su incompetencia son nuestros muertos»,



Vicente Botella, presidente de Upimir. SANTI COGOLLUDO



Mónica Blasco, de Coordinadora 5+1. ANTONIO MORENO

ba en Cataluña, la Generalitat no dio el brazo a torcer hasta que no pasaron 24 días del inicio de la pandemia», ahonda Raúl Moreno en los errores que se cometieron. Cuando



llegó a decir su presidenta, María José Carcelén-, pero ahora, en la antecámara electoral, prefieren eludir la crítica y vuelcan su discurso en las peticiones que han hecho a los partidos políticos de cara al 14-F. «La consejería ha decidido instalar oxígeno en 40 residencias, de modo que los residentes que son positivos son trasladados a ellas, pero no tienen médicos ni personal sanitario. Pedimos que los positivos sean tratados por médicos y personal de enfermería», dice Mónica Blasco cuando le preguntamos por las medidas anti Covid-19 que reclaman.

Piden también que en las residencias con clasificación verde o naranja –sin positivos o con ellos pero en fase de estabilización– se permita a los familiares visitas diarias de mínimo una hora. «El trato que se les da es de muebles viejos a los que podemos arrinconar en una habitación o encerrarlos como prisioneros sin delito ni condena. Es una actuación antidemocrática, impropia de un país que reclama derechos, pero después los deniega a una parte de su población», se lee en el escrito que han enviado a las distintas formaciones.

Demandan también que las plazas que han quedado vacantes no se cubran hasta lograr que todas las habitaciones sean individuales. Debido a los fallecimientos y a que no ha habido nuevos ingresos, las residencias catalanas están hoy a un

«Mi madre murió sola y sin asistencia, y eso es algo que llevaré toda la vida conmigo»

«A los mayores se les trata como a muebles viejos a los que se puede arrinconar»

80% de ocupación, cuando antes de la pandemia estaban al 98-100%.

Los datos los sirve ACRA, la patronal del sector en Cataluña, también muy crítica en su momento con la Generalitat: «La Covid-19 provoca

más de 16.000 muertos en Cataluña en pocos meses, casi la mitad en un sector residencial abandonado por las administraciones», decía en su revista *Especial Covid* de septiembre. Ahora prefiere centrarse en lo positivo. «La situación es esperanzadora porque en muchas residencias ya se ha puesto la segunda dosis de la vacuna y en todas ya se ha puesto la primera. Las residencias ahora son unos de los lugares más seguros», dice Montse Llopis, su directora general.

«En marzo y abril tuvimos muchas muertes, mucha falta de material y de recursos, y no sabíamos dónde acudir. La autoridades nos exigían que trabajásemos con medios que no nos facilitaban. Teníamos gente infectada que no podía derivarse porque no cumplía los requisitos, se nos sometía a tensiones para las que no estábamos preparados», dice Vicente Botella, presidente de Upimir, Unión de Pequeñas y Medianas Residencias de Cataluña. «A partir de la segunda y durante la tercera ola estamos más preparados, sabemos qué tenemos que hacer y tenemos los medios», concluye.